



**ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
EN SALUD – ADRES**

RESOLUCIÓN NÚMERO 108618 DE 2025

(01 de octubre 2025)

*"Por medio de la cual se resuelve solicitud de revocatoria directa del señor **JULIO ELIAS PEREIRA ROMERO**"*

**LA DIRECTORA (E) DE OTRAS PRESTACIONES DE LA ADMINISTRADORA DE LOS
RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – ADRES**

En ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos, 114 del Decreto Ley 019 de 2012 modificado por el Decreto Ley 2106 de 2019, en desarrollo el parágrafo del artículo 2.6.1.4.3.14 del Decreto 780 de 2016, numeral 1º y 5º del artículo 17 del Decreto 1429 de 2016 y el numeral 2º del artículo 6º de la Resolución 1012 de 2022 y

CONSIDERANDO

1. ANTECEDENTES

- 1.1** Que la Dirección de Otras Prestaciones de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud- ADRES, mediante la **Resolución No. 43329 del 22 de mayo del 2025** impuso la obligación de pagar una suma líquida de dinero a **JULIO ELIAS PEREIRA ROMERO**, identificado con cédula de ciudadanía No. **1063274068**, por la suma de SIETE MILLONES SEISCIENTOS UN MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE (\$7.601.516,85); valor indexado al mes de ABRIL de 2025; con ocasión a la reclamación **1847180, 1961681 y 2160144** derivada del accidente de tránsito ocurrido el día **14/01/2023** en el cual se vio involucrado el vehículo de placa **CSS16E**, automotor de propiedad del obligado que para la fecha de los hechos, no contaba con una póliza de seguro obligatorio SOAT.
- 1.2** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 1437 de 2011, se deja constancia de que la Resolución No. 43329 del 22 de mayo de 2025 fue notificada electrónicamente mediante correo enviado el 20 de agosto de 2025, con stampa de tiempo a las 14:37:06, recibido en la bandeja de entrada del destinatario a las 14:37:07, abierto a las 14:37:22 y leído a las 15:05:59 del mismo día, de conformidad con lo previsto en los artículos 23 y 24 de la Ley 527 de 1999 y sus normas reglamentarias; en consecuencia, se le solicita presentarse personalmente o a través de apoderado, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la presente comunicación, en la Avenida Calle 26 No. 69–76 Torre 1 Piso 16 de la ciudad de Bogotá D.C., para notificarse formalmente del contenido de la mencionada resolución.
- 1.3** En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 56 y 67 numeral 1 de la Ley 1437 de 2011 y de conformidad con la autorización otorgada para recibir notificación electrónica bajo radicado No. 20256304415292, se procede a efectuar la notificación del contenido de la Resolución No. 43329 del 22 de mayo de 2025 mediante correo electrónico enviado el 22 de agosto de 2025, con stampa de tiempo a las 10:22:34, entregado al servidor de destino a las 10:22:35, abierto por el destinatario a las 10:30:51 y leído a las 10:32:32 del mismo día, de conformidad con lo previsto en los artículos 23 y 24 de la Ley 527 de 1999 y sus normas reglamentarias, entendiéndose surtida en debida forma la notificación por aviso.
- 1.4** Que el señor **JULIO ELIAS PEREIRA ROMERO** actuando en nombre propio, mediante radicado 20256305161562 del 19 de septiembre de 2025, solicita *"Solicitud de revocatoria del acto administrativo de cobro coactivo N.º 43329 del 22 de mayo del 2025"*

2. PROCEDENCIA DE LA REVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto en el **artículo 93 de la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)**, la revocatoria directa de los actos administrativos procede de manera **excepcional** cuando se configure alguna de las siguientes causales:

1. Cuando el acto sea manifiestamente contrario a la Constitución Política o a la ley.
2. Cuando con el acto se cause un agravio injustificado a una persona.

*"Por medio de la cual se resuelve solicitud de revocatoria directa del señor **JULIO ELIAS PEREIRA ROMERO**"*

3. Cuando el acto se haya expedido con desconocimiento del derecho de defensa y contradicción.
4. Cuando aparezcan hechos o documentos nuevos que demuestren la improcedencia del acto.

En este sentido, la revocatoria no constituye un recurso adicional de impugnación, sino un mecanismo especial para garantizar la prevalencia del principio de legalidad y la protección de los derechos fundamentales, en consonancia con lo previsto en los artículos 29 y 209 de la Constitución Política.

Así mismo, la jurisprudencia del **Consejo de Estado** ha reiterado que la revocatoria directa debe analizarse bajo el principio de la **seguridad jurídica** y con observancia estricta del **debido proceso administrativo**, de manera que no puede ser utilizada para desconocer actos en firme salvo que se configure una de las causales taxativas previstas en la norma (Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia de 14 de marzo de 2019, Exp. 2015-00409-00).

En el caso bajo estudio, la solicitud de revocatoria debe ser evaluada verificando si el acto administrativo que se cuestiona cumple con los requisitos de validez y si existe prueba de alguna de las causales anteriormente mencionadas. De no acreditarse dichas causales, la revocatoria resulta improcedente y, en consecuencia, el acto administrativo mantiene su presunción de legalidad y obligatoriedad conforme a los artículos 88 y 91 del CPACA.

3. CONSIDERACIONES DE ESTA DIRECCIÓN

Sobre la presunta errónea vinculación del vehículo de placas CSS16E

El recurrente sostiene que el vehículo de placas CSS16E no participó en el accidente de tránsito ocurrido el 14 de enero de 2023 en Puerto Libertador – Córdoba. Sin embargo, del análisis integral del expediente administrativo se constata que la información oficial proveniente del organismo de tránsito competente, así como los reportes médicos de la IPS que atendió a la víctima, identifican de manera clara al automotor de placas CSS16E como partícipe del siniestro en el que resultó lesionada la señora Siomara Sáez Pacheco. Dichos documentos, conforme al artículo 66 del CPACA, gozan de presunción de veracidad y legalidad mientras no se desvirtúen con pruebas objetivas en contrario.

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que los informes de tránsito y demás documentos expedidos por autoridades competentes son prueba suficiente e idónea para soportar una actuación administrativa (Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 21 de abril de 2022, Exp. 66001-23-33-000-2014-00341-01). En el presente asunto, el recurrente no allega elementos probatorios que desvirtúen los documentos oficiales, limitándose a afirmaciones subjetivas. En consecuencia, no existe error en la vinculación del vehículo, sino una imputación legítima y debidamente soportada.

Sobre el alegado error de hecho

El recurso invoca la causal de error de hecho consagrada en el artículo 93 del CPACA. Sin embargo, la procedencia de dicha causal exige que el error sea manifiesto, ostensible y plenamente acreditado. La carga de la prueba recae en quien alega la existencia del error, conforme al artículo 167 del Código General del Proceso.

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido que "el error de hecho que habilita la revocatoria directa debe ser evidente y demostrado mediante pruebas fehacientes, sin que baste la simple manifestación del administrado" (Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia del 7 de octubre de 2021, Exp. 11001-03-24-000-2017-00483-00). En este caso, no se allega documento alguno que desvirtúe la información oficial sobre la participación del vehículo CSS16E en el accidente. Por el contrario, la actuación administrativa se soporta en reclamaciones formales radicadas por la IPS, las cuales fueron debidamente auditadas antes de su reconocimiento.

En consecuencia, no se configura error de hecho en la identificación del vehículo, ni se acredita la causal que justificaría la revocatoria directa.

Sobre la garantía del debido proceso

El recurrente invoca el artículo 29 de la Constitución, alegando vulneración de su derecho fundamental al debido proceso. No obstante, la ADRES ha garantizado de manera plena dicha garantía, al notificar oportunamente la **Resolución No. 43329 del 22 de mayo de 2025**, indicar

*"Por medio de la cual se resuelve solicitud de revocatoria directa del señor **JULIO ELIAS PEREIRA ROMERO**"*

los recursos procedentes, conceder el término legal para su interposición y permitir la presentación de pruebas y descargos.

La Corte Constitucional, en la Sentencia T-121 de 2022, reiteró que el debido proceso en actuaciones administrativas exige que el ciudadano sea informado del inicio de la actuación, tenga acceso a la misma, pueda controvertir pruebas y ejercer recursos. Todo lo cual ha sido cumplido en el presente asunto.

De igual forma, el Consejo de Estado, Sección Primera, en Sentencia del 11 de febrero de 2016 (Exp. 11001-03-24-000-2013-00342-00), recordó que el debido proceso se respeta cuando al administrado se le permite conocer las decisiones, controvertirlas y aportar elementos de defensa, aunque sus pretensiones no prosperen. En el caso bajo análisis, el recurso de revocatoria demuestra que el recurrente ha contado con todas las garantías procesales, sin que exista vulneración alguna.

Sobre la procedencia de la revocatoria directa

El artículo 94 del CPACA establece que la revocatoria directa no procede cuando el acto administrativo ha creado o modificado situaciones jurídicas particulares y concretas, salvo que el beneficiario preste su consentimiento. La Resolución No. 43329 de 2025 generó una obligación clara de reintegro de recursos a favor del Estado, situación que constituye una decisión particular y concreta y, por tanto, no puede ser revocada de manera unilateral por la Administración sin configurarse las causales taxativas previstas en la ley.

La jurisprudencia ha sostenido que la revocatoria directa es un mecanismo excepcional que no puede convertirse en una tercera instancia administrativa ni en un recurso adicional de impugnación (Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia del 14 de marzo de 2019, Exp. 2015-00409-00). En el presente caso, el recurrente pretende que mediante la revocatoria se reemplace el debate probatorio propio de la jurisdicción contenciosa administrativa, lo cual resulta improcedente.

En suma, la revocatoria directa no es el medio idóneo para controvertir el acto acusado, dado que no se configuran las causales de los artículos 93 y 94 del CPACA, ni se cuenta con el consentimiento expreso del beneficiario.

Sobre la solicitud de comunicación con la víctima

El recurrente solicita que la ADRES realice comunicación y verificación directa con la víctima para determinar la veracidad de la información. Al respecto, debe precisarse que la ADRES se rige por los principios de legalidad y eficacia administrativa, y sus actuaciones deben fundarse en documentos oficiales radicados por las IPS y organismos de tránsito, los cuales constituyen prueba idónea conforme a la ley.

No corresponde a la ADRES adelantar diligencias investigativas propias de autoridades judiciales o de tránsito, ni sustituir el papel de las IPS en la certificación de los servicios prestados. Así lo ha señalado el Consejo de Estado en Sentencia del 17 de noviembre de 2022 (Exp. 11001-03-26-000-2019-00069-00), al indicar que las entidades administrativas deben resolver con base en los documentos obrantes en el expediente y no pueden asumir competencias investigativas que no les corresponden.

En consecuencia, la solicitud del recurrente carece de fundamento legal, pues la actuación de la ADRES se limita a verificar la documentación presentada por las entidades obligadas a reportar la información y a repetir los pagos efectuados cuando no existe cobertura con póliza SOAT.

De acuerdo con lo expuesto, la Resolución No. 43329 del 22 de mayo de 2025 se encuentra ajustada a derecho, soportada en documentos oficiales que gozan de presunción de legalidad y veracidad. No se acreditan las causales de revocatoria directa previstas en el artículo 93 del CPACA, ni existe error de hecho manifiesto, ni vulneración del debido proceso.

En mérito de lo anterior, esta Dirección concluye que **no procede la revocatoria directa solicitada** por el señor Julio Elías Pereira Romero y, en consecuencia, se mantiene en firme el acto administrativo recurrido.

En virtud de lo anteriormente expuesto, esta Dirección,

"Por medio de la cual se resuelve solicitud de revocatoria directa del señor **JULIO ELIAS PEREIRA ROMERO**"

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Rechazar por improcedente la solicitud de revocatoria directa interpuesta por el señor **JULIO ELIAS PEREIRA ROMERO**, identificado con cédula de ciudadanía No **1063274068** en contra de la **Resolución No. 43329 del 22 de mayo de 2025**, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar al señor **JULIO ELIAS PEREIRA ROMERO**, identificado con cédula de ciudadanía No. **1063274068**, el contenido de la presente resolución, conforme lo establecen los artículos 67 y 68 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Destinatario	Dirección
JULIO ELIAS PEREIRA ROMERO	julioepereiraromero@gmail.com

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente decisión a la Dirección de Gestión de los Recursos Financieros de Salud y a la Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la ADRES, para que adelanten las actuaciones que correspondan en el marco de sus competencias.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la presente decisión a la Oficina Asesora Jurídica, para que adelanten las actuaciones que correspondan en el marco de sus competencias.

ARTÍCULO QUINTO: Indicar que contra la presente resolución no procede recurso alguno.

Dada en Bogotá D.C., al (01) día del mes de octubre de 2025.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



Firmado Digitalmente por
Yasmín Escamilla B.
Directora (E) de Otras Prestaciones

YASMÍN ESCAMILLA B.

Directora (E) de Otras Prestaciones

Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) –
ADRES